



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés de junio de dos mil veintitrés

**A23-091**

**ASUNTO:**

APELACIÓN AUTO

**DEMANDANTE:**

**CARLOS ALBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ** en nombre propio y en representación del menor **JOSÉ MATÍAS GÓMEZ GIL**  
**RUBY DEL SOCORRO CEBALLOS**  
**MARÍA NELLY MARTÍNEZ LEÓN**

**DEMANDADO:**

**COORDINADORA MERCANTIL S.A.**

**Llamado en garantía:**

**SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**

**RADICADO:**

**05001-31-05-006-2020-00358-01**

**DECISIÓN:**

**REVOCA** y en su lugar se decreta medio de prueba y ordena practicarlo

Link:

[23-091 \(006-2020-00358\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad llamada en garantía contra la decisión emitida el 27 de marzo de 2023 mediante la cual el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín negó la práctica de una prueba.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 20** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

### 1. ANTECEDENTES

- Pretende la parte actora obtener el pago de la indemnización plena de perjuicios, en los montos que reseña, derivada de un accidente laboral ocurrido el día 22 de mayo de 2019, que le produjo al señor Carlos Alberto Gómez Martínez una pérdida de capacidad laboral del 26.40%, último que además solicita que se declare la *estabilidad laboral reforzada* por tener una discapacidad permanente y no contar la empresa con permiso de la oficina del trabajo, además de las costas del proceso. Entre los anexos de la demanda obra el dictamen expedido el 2 de septiembre de 2020 por la Junta Regional de Calificación de invalidez de Antioquia.

- Al contestar el llamamiento en garantía, la sociedad SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. en el acápite denominado medios de prueba *RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS - CONTRADICCIÓN DICTAMEN PERICIAL*, adujo que

En aplicación de lo consagrado en el artículo 262 del Código General del Proceso solicito se cite a los terceros que elaboraron los siguientes documentos, con el fin de que el contenido de estos sea ratificado, así como para indagar sobre las circunstancias que rodearon la elaboración de los mismos y los presupuestos y consideraciones que se tuvieron para ello, así:

- Dictamen de pérdida de capacidad laboral. Teniendo en cuenta el documento aportado por la parte y a cuál se le quiere otorgar valor de dictamen pericial, solicito la comparecencia de los profesionales que suscribió los documentos, con el fin de ejercer el derecho de defensa y contradicción en los términos del artículo 227 y ss del Código General del Proceso, por lo que se interrogará al perito

- En audiencia celebrada el 27 de marzo de 2023 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín negó el decretó de dicho medio de prueba, decisión contra la llamada en garantía interpuso y sustentó recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. DE LA JUEZ AL DECIDIR**

Adujo que el dictamen fue emitido por una junta, autoridad competente para definir la controversia atinente al establecimiento del porcentaje de pérdida de capacidad laboral de cara al puntaje que en su momento definió la ARL, aclarando que si la parte encontró desertadas sus conclusiones o que las mismas eran objeto de reproche, debió entonces controvertirlo aportando uno nuevo, aunado a que tampoco se trataba de una ratificación de documentos como lo mencionó la aseguradora al contestar la acción.

### **2.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN**

Recalca que el artículo 228 del CGP permite que la contradicción del dictamen se haga de dos formas. Primero solicitando la comparecencia de los profesionales que suscribieron los dictámenes para ser interrogados sobre el contenido del mismo y su idoneidad, siendo esta precisamente la opción acogida por la entidad. La segunda manera era, como efectivamente lo adujo la a quo, era aportando un nuevo dictamen, lo que NO significaba que fuera la única forma de objetar o controvertir la experticia allegada.

Considera relevante la comparecencia del perito para que explique las conclusiones a las cuales llegaron y el motivo por el cual realizó el estudio.

Aclara que NO está discutiendo ni el origen ni la fecha de estructuración, únicamente si las lesiones que sufrió el actor en el accidente de tránsito son la causa única y exclusiva de la pérdida de capacidad laboral, dado que al revisar el concepto hay un porcentaje de 10 puntos atribuibles a unas lesiones en la columna, que nada

tienen que ver con el aludido accidente. En tal sentido requiere saber si el 26% de pérdida de capacidad laboral es totalmente imputable única y exclusivamente al accidente de tránsito.

Por último, destaca que la aseguradora NO fue parte dentro del trámite administrativo de valoración, razón por la que la negativa de este medio le impediría ejercer una debida contradicción.

En dichos términos solicita se REVOQUE la decisión adoptada en primera instancia.

### **2.3. ALEGATOS**

Ninguna de las partes presentó alegatos.

### **3. PROBLEMA JURÍDICO**

Consiste en determinar si es procedente solicitar la comparecencia del perito a la audiencia y decretar la prueba denegada en los términos pretendidos por el recurrente, es decir, aplicando lo dispuesto en el art. 228 del CGP.

### **4. CONSIDERACIONES**

Sea lo primero advertir que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo dispone el numeral 4° del artículo 65 del CPT y la SS, es apelable el auto que *niegue el decreto o la práctica de una prueba*.

Ahora, ciertamente la llamada en garantía al solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, denominó su petición como *ratificación de documentos*, tema que ahora regula entre otros, los artículos 185 y 262 del Código General del Proceso, relacionados con documentos declarativos emanados de terceros y declaración sobre la autoría, alcance y contenido del mismo.

No obstante, más allá de la acepción que en su momento utilizó la aseguradora, de una lectura integral de lo aducido en la contestación se desprende que lo pretendido es realmente que en aplicación de lo estipulado en el artículo 228 del Código General del Proceso, se decrete la comparecencia del perito a la audiencia a fin de contradecir el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia en el trámite administrativo, en el cual NO participó, para efectos de materializar su derecho de contradicción y esclarecer asuntos atinentes a la merma de capacidad laboral, NO así la fecha de estructuración ni el origen, súplica que NO tuvo eco en la respectiva audiencia de decreto de pruebas.

Consultemos lo que al respecto prevé la norma en comento:

ARTÍCULO 228. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. **La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia**, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. **En virtud de la anterior solicitud**, o si el juez lo considera necesario, **citará al perito a la respectiva audiencia**, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuentes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor.

Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez.

Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se hubiere proferido sentencia. Si el proceso fuera de única instancia, se fijará por una sola vez nueva fecha y hora para realizar el interrogatorio del perito.

En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave.

PARÁGRAFO. En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental absoluta e inhabilitación por discapacidad mental relativa, el dictamen podrá rendirse por escrito.

En estos casos, se correrá traslado del dictamen por tres (3) días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de uno nuevo, a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen.

Claramente resulta desacertado el argumento de la a quo al señalar que NO procede la citación del perito a la audiencia porque debió aportar uno nuevo ante una eventual inconformidad. Otra cosa es lo que regula la norma, otorgándole a la parte resistente la facultad de optar por solicitar la comparecencia *del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones*. NO puede el fallador cercenar dicha posibilidad.

Diferente sería que la prueba NO resultase conducente, pertinente o útil para la demostración de los hechos.

Y es que NO basta con formular la petición en tiempo pues para efectos de decretar y practicarla debe cumplir con unos requisitos intrínsecos, que en palabras del tratadista Nattan Nisimblat, garantizan su posterior eficacia; ellos son la conducencia, la pertinencia y la utilidad, definidos por el autor en mención, en su obra *DERECHO PROBATORIO TÉCNICAS DEL JUICIO ORAL*, 4ª edición, páginas 216 y 2017, así:

- La conducencia como la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar.
- La pertinencia como la relación directa entre la prueba solicitada y el hecho alegado en el proceso, que por demás debe tener asignada una consecuencia en una norma procesal, es decir, la prueba tiende a demostrar aquello que está en debate o es objeto de prueba. Será impertinente si el hecho no se alegó o siendo alegado **no hace parte del postulado normativo que gobierna el caso**, o no

busca demostrar el supuesto de hecho de una norma que consagra el efecto jurídico perseguido por la parte.

- Utilidad: señala el autor que la prueba lo será cuando el hecho que se quiere acreditar con ella NO se encuentra plenamente demostrado en el proceso, tornándose necesaria.

Quiere ello decir que el Juez Laboral está facultado para decretar y practicar las pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para la demostración de los hechos relacionados, tanto en la demanda inicial como en la contestación de la misma.

Bajo dicho contexto, la información que se pretende obtener, relativa a la identificación de las causas que generaron la merma de capacidad del actor, no sólo tendría vocación de soportar una tesis de defensa de la parte resistente del juicio, sino además que contribuye a esclarecer los supuestos de hecho que ha de analizarse respecto de la norma que gobierna el caso y que contempla la consecuencia jurídica que por esta vía se pretende, evento en el que acudimos a lo previsto en el art. 216 del CST y demás normas concordantes de cara a la liquidación de la indemnización plena de perjuicios, ya que el hecho de que un subordinado padezca de diferentes afecciones, incluso todas ellas de origen laboral, NO necesariamente han de originarse por un accidente, otras causas pueden confluir, y precisamente ahí radica la pertinencia del medio de prueba solicitado, máxime si de ello dependerá el mayor o menor monto de una eventual condena.

Destáquese además que en la contestación corresponde a la parte enunciar los medios de prueba que utilizará para acreditar los hechos en que funda sus excepciones, siendo el enunciado por el recurrente el idóneo para tal fin, sin que le este dado al fallador, se insiste, sin un fundamento sólido, cercenar la posibilidad que tiene la parte de interrogar a un perito, método que además le permite al juez apreciar directamente la prueba para tener certeza sobre los dichos del perito frente a los hechos relevantes del proceso, máxime si sobre el dictamen, tal y como se dijo, puede edificarse una condena, materializándose así principios como el de inmediación y contradicción que garantizan los derechos al debido proceso judicial y a la defensa. En este orden de ideas, el sistema de contradicción oral se convierte en un mecanismo indispensable para garantizar, no sólo el pleno ejercicio del derecho de contradicción, sino además la inmediación del Juez del conocimiento en el recaudo del medio de prueba, fines perseguidos con la implementación de la oralidad.

Aunado a lo anterior, es obligación del Juez encontrar la verdad real de los hechos en que se funda el derecho y la forma más expedita para llegar a ese fin es decretando pruebas que sean conducentes y necesarias, sin los rigurosos formalismos del método escritural; para el caso de autos, es procedente el decreto y práctica de la prueba que negó el a quo pues lo que se busca con la misma es determinar si la totalidad del porcentaje de pérdida de capacidad laboral del demandante deviene del accidente ocurrido, cuyo esclarecimiento, junto con la acreditación de la culpa patronal, comportan columnas vertebrales del litigio.

Así las cosas, se REVOCARÁ el auto venido en apelación y en su lugar se decreta la comparecencia a la audiencia de práctica de pruebas del señor Edgar Augusto Correa Ochoa, médico ponente de la Junta

Regional de Calificación de Invalidez que realizó el dictamen que data del 2 de septiembre de 2020, con el consecuente pago de las expensas que ello requiera a cargo de quien solicitó tal medio, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 228 del Código General del Proceso.

Sin costas en esta instancia.

**5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

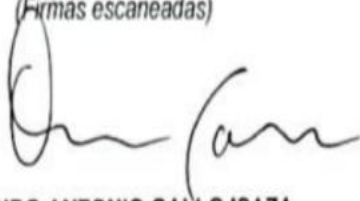
Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

**PRIMERO: REVOCA** el **AUTO** proferido el 27 de marzo de 2023 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín mediante el cual se negó el decreto de una prueba dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **CARLOS ALBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ** y otros, contra la sociedad **COORDINADORA MERCANTIL S.A.**, trámite al que se llamó en garantía a **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.** y en su lugar se decreta la comparecencia del médico ponente a la audiencia de práctica de pruebas, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notificará por ESTADOS y se dispone devolver el expediente al despacho de origen.

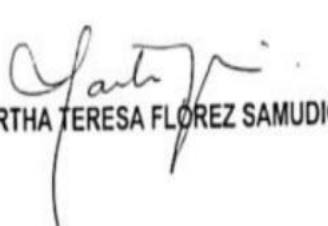
Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

**CERTIFICO:** Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 108 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.  
Medellín 26 DE JUNIO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>